



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ejecutivo Laboral
Radicado: 05129-31-03-001-2021-00257-02
Ejecutante: Alveiro de Jesús Chavarriaga
Ejecutadas: Mina La Margarita S.A.S.
Asunto: Apelación de Auto
Procedencia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Resolución de excepciones - Pago

Medellín, agosto treinta (30) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Mina La Margarita S.A.S., respecto del auto que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, proferido el 25 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas - Antioquia, en el proceso ejecutivo laboral conexo instaurado por Alveiro de Jesús Chavarriaga contra la Mina La Margarita S.A.S., conocido con el Radicado Único Nacional 05129-31-03-001-2021-00257-02.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Alveiro de Jesús Chavarriaga instauró demanda ejecutiva laboral contra la Mina La Margarita S.A.S. pretendiendo el pago indexado de las indemnizaciones por perjuicios materiales y morales, y por el despido injusto u omisión de preaviso, a las que fue condenada en el trámite ordinario conocido con el Radicado Nacional 05129-31-03-001-2006-00616-00, discriminadas en \$159.550.925,11, indexados, por perjuicios materiales; cien (100) SMLMV por perjuicios morales; y \$438.670, indexados, por el despido injusto u omisión de preaviso (doc.01, carp.01).

1.2.- MANDAMIENTO DE PAGO

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas - Antioquia, mediante auto proferido el 02 de septiembre de 2021, libró mandamiento de pago en favor de Alveiro de Jesús Chavarriaga y en contra de la Mina La Margarita S.A.S. (doc.03, carp.01), por los siguientes conceptos:

“1. Por perjuicios materiales del demandante los cuales ascienden la suma de ciento cincuenta y nueve millones quinientos mil novecientos veinticinco mil pesos con once centavos (\$159.550.925,11), debidamente indexada.

2. Perjuicio morales 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. Al pago de la suma de cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos setenta pesos (\$438.670) por la omisión en el preaviso que debió dar al trabajador.”

1.3.- EXCEPCIONES

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial legalmente constituido, la **Mina La Margarita S.A.S.** dijo que 14 de septiembre de 2021 depositó a órdenes del despacho, el valor ordenado en el mandamiento de pago, y sostuvo que no hay lugar al reconocimiento de la indexación pretendida por el ejecutante, por cuanto la misma no consta de forma clara, expresa y exigible en la sentencia que sirve como título ejecutivo, en la medida en

que no se profirió condena en concreto sobre la misma. De consiguiente, propuso las excepciones que denominó pago total de la obligación; buena fe; e imposibilidad de condena en costas en el trámite de ejecución (doc.08, carp.01).

1.4.- RESOLUCIÓN DE EXPCIONES

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas – Antioquia, mediante auto proferido el 25 de mayo de 2023, declaró no probadas las excepciones formuladas; ordenó seguir adelante con la ejecución, en los términos indicados en el mandamiento de pago; dispuso que en la liquidación del crédito se tuvieran en cuenta los pagos efectuados por la demandada; y condenó en costas a la ejecutada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$8.000.000 (doc.44, carp.01).

1.5.- RECURSO DE APELACIÓN

El poderhabiente judicial de la **Mina La Margarita S.A.S.** interpuso el recurso de apelación en procura de que se revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, se declare probada la excepción de pago total de la obligación, absolviendo a su representada de la condena en costas, sustentando que, para reclamar el pago de la indexación ordenada en la sentencia de segunda instancia, la parte actora debió haber tramitado la liquidación y/o determinación de su valor al interior de trámite ordinario, conforme a lo establecido en los artículos 283 y siguientes del CGP, que le imponen al demandante la obligación procesal de presentar un incidente para estimar el valor de la indexación ordenada.

Sostuvo además que la orden de indexación comporta una condena independiente de las demás que fueron impuestas, la cual, resulta asimilable a los intereses o frutos civiles que puede percibir determinada suma de dinero, los cuales no pueden ordenarse en abstracto o de forma indeterminada, como se hizo respecto a la indexación en la sentencia del trámite ordinario.

Adicionalmente aseveró que la condena por indexación debe tener, por lo menos determinada, una fecha de iniciación y una fecha de terminación, extremos respecto de los que las partes han manifestado controversia, por lo que no existe claridad ni certeza sobre cuanto se debe, esto es, no existe título ejecutivo porque lo meramente indicativo, implícito o tácito no constituye una obligación clara, expresa ni exigible.

Finalmente, sostuvo que el monto fijado por concepto de agencias en derecho carece de sustento en la medida en que la condena en concreto ya fue cancelada, y a la fecha no se ha definido el valor al que asciende la indexación presuntamente adeudada (minuto 01:18:25, doc.41, ccarp.01).

1.6.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Finalmente, se advierte que dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la **Mina La Margarita S.A.S.**, insistió en que la indexación no fue liquidada en la sentencia dictada en el proceso ordinario; que aquella providencia tampoco identifica las fechas que se deben tener como referencia para su liquidación; que la parte actora tampoco adelantó el incidente de liquidación previsto en el artículo 283 del CGP; que el mandamiento ejecutivo no determina el monto de la obligación de indexación; y que las obligaciones claras, expresas, líquidas y exigibles ordenadas, ya fueron canceladas, siendo improcedente que se siga con la ejecución por un concepto inexistente (doc.03, carp.02).

Por su parte, el vocero judicial del señor **Alveiro de Jesús Chavarriaga** solicitó que se confirme la decisión de primera instancia arguyendo que el pago efectuado por la sociedad demandada no comprende la indexación de las condenas, las agencias de la primera instancia del proceso ordinario, ni las costas del trámite ejecutivo; y que la indexación de las obligaciones impuestas en la sentencia ordinaria debe ser liquidada desde el 31 de julio de 2008, y para el 31 de julio de 2022 ascendía a la suma de \$117.781.071 (doc.04, carp.02).

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por la **Mina La Margarita S.A.S.**, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y lo previsto en los artículos 65 y 66 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

2.2.- PROBLEMA JURÍDICO

Debe determinar la Sala:

¿Si la Mina La Margarita S.A.S. pagó en su totalidad la obligación de dar impuesta en el trámite ordinario del que se deriva la presente ejecución, efecto para el que habrá que establecer si le asiste a esta la obligación de pagar la indexación de las condenas impuestas en el trámite ordinario, para lo cual se tendrá que determinar si la misma corresponde a una condena adicional, y si fue ordenada de forma clara, expresa y exigible, esto es, si presta mérito ejecutivo?

2.3.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual la indexación no comporta una condena adicional a la solicitada ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia; corrección monetaria que fue ordenada de forma clara, expresa y exigible en la sentencia que sirve como título ejecutivo, siendo que, aunque no fue liquidada, es una obligación liquidable, y cuyos extremos temporales se encuentran definidos en la fórmula liquidataria y en todo caso podrán controvertirse en la etapa procesal correspondiente. Así las cosas, el auto en el

que se ordenó seguir adelante con la ejecución, condenando en costas a la sociedad ejecutada, será **modificado** y **confirmado**.

2.4.- PREMISAS NORMATIVAS

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor, busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.

A su turno, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”.

Tratándose de obligación de dar, el artículo 424 ibídem prevé:

“ARTÍCULO 424. EJECUCIÓN POR SUMAS DE DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe.

Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. Cuando se pidan intereses, y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma”.

Respecto a las excepciones que pueden ser formuladas en el proceso de ejecución de sentencias judiciales, el numeral segundo del artículo 442 ibíd. dispone:

“ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

(...)

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. (...)”

Finalmente, y en lo que tiene que ver con la indexación, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL359-2021, adoctrinó:

“En efecto, la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que «el pago efectivo es la prestación de lo que se debe», esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. [...].

Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. [...].

Desde este punto de vista, cuando el juez del trabajo advierte un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de prestaciones económicas [...] su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros; tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16

de la Ley 446 de 1998, según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales» [...].

Sobre esta materia, la Sala de Casación Civil de esta Corte, en sentencia CSJ SC6185-2014, a través de la cual reiteró la CSJ SC, 18 dic. 2012, rad. 2004-00172, adocrinó: (i) la indexación no pedida en la demanda, pero concedida por el juez de segundo grado, no trasgrede alguna disposición sustantiva, «dado que en verdad, en ésta (sic) no se concedió más de lo requerido, sino la misma cantidad, pero traída a valor presente» [...]; (ii) ello no excede el orden legal o constitucional, sino que, contrario, «lo respeta y preserva, mayor aún, si se tiene en cuenta que la actualización del monto del perjuicio, lo que comporta es desarrollo del principio de equidad y plenitud del pago implícitamente solicitado»; y (iii) la consecuencia de esto es que el referido ajuste deba entenderse «[...] como un factor compensatorio, con el que se mantiene el poder adquisitivo de la moneda, cuando por el transcurso del tiempo, ésta (sic) se devalúa». [...].

Por lo visto, el juez del trabajo tiene el deber, incluso con el empleo de las facultades oficiosas, de indexar los rubros causados en favor de la demandante, lo cual, en vez de contrariar alguna disposición sustantiva o adjetiva, desarrolla los principios de equidad, justicia social y buena fe que tienen pleno respaldo constitucional; de paso protege la voluntad intrínseca del interesado, puesto que es impensable que desee recibir el crédito causado en su favor con una moneda depreciada.

Debe insistirse en que la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación. Sin la indexación, las condenas serían deficitarias y el deudor recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial”.

2.6.- CASO CONCRETO

De la normatividad en cita se infiere que los títulos ejecutivos deben gozar de dos (2) tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras, aluden a que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean: (i) auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, o de decisiones que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas

o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme, perspectiva desde la que hay que considerar que el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

Entre tanto, las condiciones sustanciales, apuntan a que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona, es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de dar, de hacer, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. La obligación es clara cuando no da lugar a equívocos, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación, y los factores que la determinan; es expresa, cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación; y es exigible, si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, o si el plazo se hubiere extinguido, y la condición se hubiere cumplido.

Ahora bien, en el *sub juice* se encuentra acreditado que el señor Alveiro de Jesús Chavarriaga promovió demanda ordinaria laboral contra la Mina La Margarita S.A.S., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios por lucro cesante, daño emergente, daños morales, y daños estéticos y fisiológicos, derivado del accidente de trabajo que sufrió por culpa del empleador; y de la indemnización por despido injusto; junto con la indexación de las condenas, y las costas del proceso (págs.01-12, doc.01, subcarp.00, carp.01).

También obra constancia de que la controversia planteada se dirimió en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito Adjunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas – Antioquia, mediante sentencia proferida el 15 de febrero de 2013 (págs.328-347, doc.01, subcarp.00, carp.01), en la que se resolvió:

“PRIMERO: Declarar probadas las excepciones de ausencia de culpa por parte de la empresa y culpa de la víctima, tampoco habrá lugar a declarar la supuesta ilegalidad del despido, ni a ordena el pago de la indemnización consagrada en el artículo 64 del CST, tal como se indicó en la parte motiva, dentro del proceso ordinario laboral de primera

instancia promovido por Alveiro de Jesús Chavarriaga, contra Mina La Margarita S.A., despachando así desfavorablemente las pretensiones del demandante”

Adicionalmente, está demostrado que la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia proferida el 22 de abril de 2016 (págs.423-446, doc.01, subcarp.00, carp.01), decidió:

“PRIMERO: Revocar el numeral primero de la sentencia recurrida, en cuanto declaró probada la ausencia de culpa por parte de la empresa Mina La Margarita S.A., y en su lugar, declarar probada la culpa patronal de ésta, en relación con el accidente de trabajo sufrido por el señor Alveiro de Jesús Chavarriaga, y condenar a la sociedad Mina La Margarita S.A., al pago de las siguientes sumas:

- Por perjuicios materiales del demandante, los cuales ascienden a la suma de ciento cincuenta y nueve millones quinientos cincuenta mil novecientos veinticinco mil pesos con once centavos (\$159.550.921,11), debidamente indexados.*
- Perjuicios morales por 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
- Absolver a la sociedad demandada del pago de los perjuicios fisiológicos conforme a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.*

SEGUNDO: Condenar a la Mina La Margarita S.A. al pago de la suma de cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos setenta pesos (\$438.670) por la omisión en el preaviso que debió dar al trabajador, en los términos sustentados en este proveído, esta suma deberá ser indexada al momento de su pago”

También está probado que la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 08 de septiembre de 2020 (págs.78-130, doc.02, subcarp.00, carp.01), resolvió:

“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de abril de 2016, en el proceso ordinario laboral que instauró Alveiro de Jesús Chavarriaga contra la sociedad Mina La Margarita S.A.”

De otro lado, se encuentra acreditado que el 14 de septiembre de 2021, la Mina La Margarita S.A.S. constituyó a órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito

de Caldas – Antioquia, un título judicial por valor de \$250.842.196 (pág.03, doc.10, carp.01), que corresponde a la suma del valor de la condena impuesta por perjuicios materiales (\$159.550.925,11), por perjuicios morales (SMLMV 2021 \$908.526 * 100 = \$90.852.600), y por el despido injustificado o la omisión de preaviso (\$438.670); y que el día 24 del mismo mes y año, constituyó otro título judicial, esta vez, por valor de \$8.480.000 (pág.04, doc.10, carp.01), que corresponde al valor de las agencias en derecho impuestas en el recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, esta corporación establece que la Mina La Margarita S.A.S. ciertamente no ha cumplido a cabalidad la obligación de dar impuesta por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la sentencia proferida el 22 de abril de 2016, en la medida en que no ha cancelado la indexación que, contrario a lo considerado por el recurrente, fue ordenada de manera expresa en la misma providencia que sirve como título ejecutivo, esto es, aparece nítida y manifiesta en la redacción de la sentencia, y que además acredita las condiciones de claridad y exigibilidad, por cuanto no da lugar a equívocos respecto del deudor, acreedor, ni naturaleza de la obligación, y además no fue sujeta a plazo o condición alguna.

Adicionalmente, para la Sala no es de recibo la tesis esbozada por la sociedad demandada, y según la cual, como el valor de la condena impuesta por concepto de indexación no fue determinada, la misma debía liquidarse mediante incidente promovido por el demandante, en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 283 del CGP, porque la misma no se asemeja a los intereses, mejoras o frutos civiles a las que hace referencia la normativa en cita, siendo que la indexación no es una compensación por los perjuicios derivados del incumplimiento, ni una modificación de la obligación, ni se produce como un fruto, sino que, en voces de la jurisprudencia, busca garantizar el pago de la misma obligación, pero traída a valor presente (CSJ SL359-2021).

Ahora bien, es cierto que la condena impuesta por concepto de indexación no fue determinada en su valor, empero la misma es liquidable por operación aritmética, y aunque los factores que la determinan tampoco fueron expresados en la providencia, los mismos se extraen o infieren bajo un simple razonamiento lógico de la formula aplicable para determinar su valor (*sentencias SL1840, SL 1733 y 1476 de 2023*) y del contenido de la sentencia que sirve como título ejecutivo.

La fórmula para actualizar, indexar o traer a valor presente una suma de dinero es:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}} * \text{Capital} - \text{Capital}$$

De donde:

Índice Final: Corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la fecha de pago del capital

Índice Inicial: Corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la fecha de causación o exigibilidad del capital

Capital: Corresponde al valor de la condena

Así las cosas, se colige que para actualizar la condena impuesta por concepto de perjuicios materiales, debe tenerse como el índice final el IPC de septiembre de 2021, que corresponde a la fecha en que se produjo su pago de la obligación, (pág.03, doc.10, carp.01), y como índice inicial el IPC de agosto de 2008, que corresponde a la fecha en que fueron liquidados. (págs.423-446, doc.01, subcarp.00, carp.01).

Para los anteriores efectos téngase en cuenta que aunque la sentencia que sirve como de la presente ejecución se profirió el 22 de abril de 2016 (págs.423-446, doc.01, subcarp.00, carp.01), lo cierto es que, al momento de tasar los perjuicios morales, en la misma se indicó:

“Para la Sala se encuentra demostrada la culpa del empleador en el accidente laboral sufrido por el demandante, conforme a lo anteriormente expuesto, por lo que se revocará este aspecto de la sentencia recurrida, y en su lugar se accederá al reconocimiento y pago de la indemnización plena de los perjuicios materiales, es decir, lucro cesante y daño emergente:

De folios 161 a 165 reposa dictamen pericial por medio de cual se liquidaron los perjuicios materiales del demandante, los cuales asciende a la suma de ciento cincuenta y nueve millones quinientos cincuenta mil novecientos veinticinco mil pesos con once centavos (\$159.550.921,11), suma que deberá ser indexada al momento del pago”.

Ahora bien, en dictamen pericial al que se está haciendo referencia, para liquidar el valor de los perjuicios materiales, se consideraron, entre otros factores, el IPC de marzo de 2006, fecha en que ocurrió el accidente de trabajo, y el IPC de julio de 2008, fecha en la que se elaboró el dictamen (págs.234-238, doc.01, subcarp.00, carp.01), de lo que se infiere que el valor de los referidos perjuicios solo fue actualizado hasta julio de 2008, siendo entonces lo procedente, a efectos de actualizar en debida forma el valor de la condena, calcular la indexación de dicha suma desde agosto de 2008 y hasta septiembre de 2021, así:

$$\text{Indexación} = \frac{110,04}{69,19} * \$159.550.925,11 - \$159.550.925,11$$

$$\text{Indexación} = \textbf{\$94.199.382,73}$$

De donde

$$\text{Índice Final:} \quad \text{IPC 2021-09} = 110,04$$

$$\text{Índice Inicial:} \quad \text{IPC 2008-08} = 69,19$$

$$\text{Capital:} \quad \$159.550.925,11$$

Y para actualizar la condena impuesta por concepto indemnización por despido injusto u omisión de preaviso, debe tenerse como el índice final el IPC de septiembre de 2021, que corresponde a la fecha en que se produjo su pago de la

obligación, (pág.03, doc.10, carp.01) y como índice inicial el IPC de marzo de 2006, que corresponde a la fecha en que terminó la relación de trabajo (págs.76-77, doc.01, subcarp.00, carp.01), así:

$$\text{Indexación} = \frac{110,04}{59,83} * \$438.670 - \$438.30670$$

$$\text{Indexación} = \quad \textbf{\$368.136,73}$$

De donde

$$\text{Índice Final:} \quad \text{IPC 2021-09} = 110,04$$

$$\text{Índice Inicial:} \quad \text{IPC 2006-03} = 59,83$$

$$\text{Capital:} \quad \$ 438.670,00$$

En vista de lo anterior, el auto que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago será modificado, en el sentido de declarar parcialmente probada la excepción de pago, teniendo únicamente en cuenta el depósito del título judicial constituido por valor de \$250.842.196 (pág.03, doc.10, carp.01), siendo que el título judicial constituido por la suma de \$8.480.000 (pág.04, doc.10, carp.01), realmente corresponde al pago de las agencias en derecho fijadas en el recurso extraordinario de casación, y como las costas impuestas al interior del proceso ordinario no son objeto de la presente ejecución, dicha suma no tiene la vocación de abonar o disminuir el valor el crédito adeudado.

Consecuentemente, se ordenará seguir adelante con la ejecución, por la suma de \$94.199.382,73, que corresponde al valor de la indexación de la indemnización de perjuicios materiales, y la suma de \$368.136,73, que corresponde a la indexación de la indemnización por despido injusto u omisión de preaviso, cifras sobre las que no procede ninguna otra actualización.

De las costas procesales

Costas en esta instancia a cargo de la Mina La Margarita S.A.S., por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto; se fijan agencias en derecho en favor de Luís Alberto Higueta en la suma de \$1.160.000 que corresponde un (1) SMLMV, conforme a lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

La condena en costas impuesta en la primera instancia se confirma a cargo de la Mina La Margarita S.A.S., por no haber alcanzado prosperidad la excepción de pago formulada, esto es, por haber sido vencida en juicio; memorando, eso sí, que conforme a lo previsto en el numeral 5° del artículo 635 del CGP, el monto de las agencias en derecho solo podrá controvertirse mediante os recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.

3.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE

1.- Se MODIFICA el numeral primero del auto que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, proferido el 23 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas, en el proceso ejecutivo laboral instaurado por Alveiro de Jesús Chavarriaga contra la Mina La Margarita S.A.S., en el sentido de declarar parcialmente probada la excepción de pago, en relación con el depósito del título judicial constituido por valor de \$250.842.196.

2.- Se MODIFICA el numeral segunda del auto de fecha y procedencia conocidas, en el sentido de ordenar seguir adelante con la ejecución por la suma de \$94.199.382,73, que corresponde al valor de la indexación de la indemnización de perjuicios materiales, y la suma de \$368.136,73, que corresponde a la indexación de la indemnización por despido injusto u omisión de preaviso.

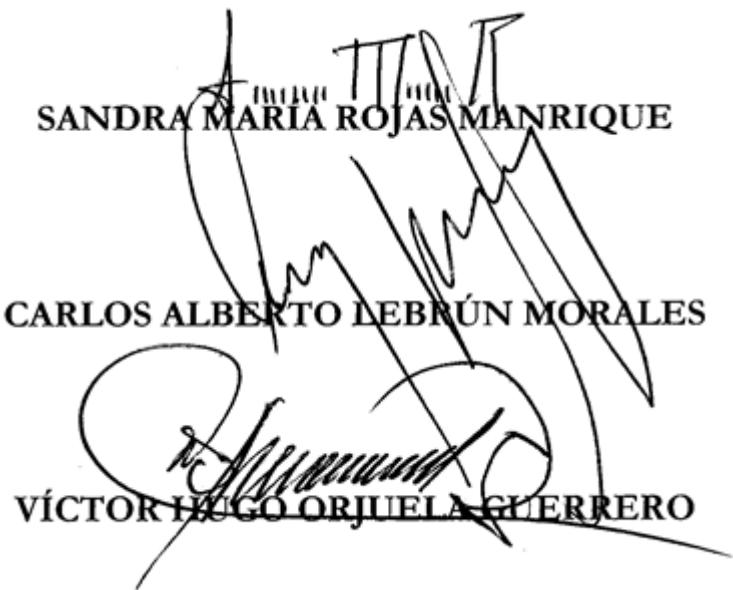
3.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás el auto de fecha y procedencia conocidas.

4.- Costas en esta instancia a cargo de la Mina La Margarita S.A.S. y en favor de Alveiro de Jesús Chavarriaga; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000. Las costas impuestas en la primera instancia se confirman en los términos explicados en la parte motiva de este proveído.

Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado por estado N°151 fijado en la secretaria de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 31 de agosto de 2023.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario